

**RESOLUCIONES ADOPTADAS EN EL IX CONGRESO
(Lisboa, 1972)**

De la ejecución de las decisiones arbitrales y judiciales internacionales

Ponente: Andrés GONÇALVES PEREIRA (Portugal)

El IX Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional.

1. *Reconoce* que en el estado actual del Derecho Internacional, son insatisfactorios los mecanismos existentes para obtener el cumplimiento de las decisiones arbitrales y judiciales internacionales.

2. *Afirma* que el incumplimiento de las decisiones judiciales o arbitrales internacionales atenta contra los principios básicos del Derecho y de la Comunidad internacionales y recuerda que constituye un hecho ilícito generador de responsabilidad internacional.

3. *Afirma* que la utilización de los organismos especializados y de las organizaciones regionales puede ofrecer solución en muchos casos de dificultad de ejecución de decisiones arbitrales o judiciales internacionales.

4. *Afirma* que debería procurarse hacer efectiva la utilización del mecanismo de cumplimiento de las decisiones judiciales y arbitrales del tipo previsto en el artículo 94, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas, y tenderse a la celebración de Convenios con el mismo fin, especialmente de la cooperación regional, confiriendo a los órganos respectivos las competencias necesarias para tal ejecución.

5. *Reconoce* que, en el estado actual del Derecho internacional, no puede dejarse de admitir la posibilidad de ejercicio de la autotutela para el cumplimiento de decisiones judiciales y arbitrales, siempre que no implique el recurso a la fuerza ni lleve a una situación de deterioro grave de las relaciones entre los Estados.

6. *Recomienda* a los Estados que, en sus legislaciones internas, adopten las medidas oportunas para dar cumplimiento a las decisiones arbitrales o judiciales internacionales.

7. *Entiende* que el perfeccionamiento de los mecanismos de ejecución de decisiones judiciales y arbitrales internacionales, sólo será posible en la medida en que se avance en el proceso de instauración de la sociedad internacional organizada y, en consecuencia, *considera* que el I.H.L.A.D.I. deberá prestar su decidida colaboración a todas las iniciativas destinadas a formar en la opinión pública mundial el clima necesario para el deseable progreso de organización de la sociedad internacional que permita establecer medios de ejecución más eficaces que los actuales.

La determinación del contenido del “ius cogens”

Ponente: José Antonio PASTOR RIDRUEJO (España)

El IX Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional,

Consciente de que la sumisión de los Estados al Derecho internacional exige la existencia de normas absolutamente imperativas, a manera de las que Francisco Suárez

calificó como *ius preceptivum*, constitutivas de lo que la doctrina actual denomina *ius cogens* internacional;

Considerando que el carácter positivo de las referidas normas, según intuyó Francisco de Vitoria, se funda en la auctoritas *totius orbis*, la cual origina, como afirmó el Tribunal Internacional para con la comunidad internacional en su conjunto;

Considerando, que el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ofrecida a la firma de los Estados el 23 de mayo de 1969, reconoce la existencia de dicho *ius cogens* cuando haya una «norma aceptada y reconocida por la Comunidad internacional de Estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma posterior de Derecho internacional que tenga el mismo carácter»;

Considerando que es misión de la doctrina, de que este Instituto participa, contribuir a la determinación del *ius cogens* internacional;

DECLARA QUE:

1º. La caracterización de una norma como *ius cogens* puede resultar de la práctica de los Estados, de la jurisprudencia de los tribunales internacionales y de la doctrina, así como de resoluciones y declaraciones de las organizaciones internacionales competentes y especialmente de los convenios internacionales.

2º. No existe hoy una fórmula suficientemente precisa para determinar el contenido del *ius cogens* internacional mediante una definición general y abstracta, ni tampoco se juzga oportuna su codificación global *ad hoc*.

3º. La determinación del contenido del *ius cogens* debe hacerse de forma incidental en el proceso codificador del Derecho internacional.

Y RECOMIENDA:

1º. Que los tribunales califiquen, cuando proceda y en la medida de lo posible, el carácter del *ius cogens* de las normas que consideren.

2º. Que los organismos codificadores determinen en qué casos tienen carácter de *ius cogens* las normas codificadas por ellos y hagan mención expresa de tal carácter.

3º. Que la doctrina atienda también a la determinación del carácter de *ius cogens* de las normas internacionales.

Inmunidad jurisdiccional de los Estados

Ponente: Gerson de BRITO MELLO BOSON (Brasil)

El IX Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional.

Considera: que si bien la cuestión de la inmunidad de jurisdicción de los Estados no ha encontrado aún una solución que armonice las diversas tendencias de la doctrina internacional y de la jurisprudencia de los distintos países, advierte cierto progreso en el sentido de la institucionalización de soluciones, que refuerzan los principios del Derecho internacional, conjugando las exigencias de la seguridad jurídica y de la justicia, y a los que tanto los individuos como los Estados deben someterse, y

DECLARA:

1°. La inmunidad de jurisdicción es necesaria para la convivencia internacional y es inherente a la idea de Estado moderno, pero debe ser limitada a los supuestos en que resulte esencial, para el ejercicio de las funciones soberanas del Estado.

2°. Son laudables todos los esfuerzos que puedan conducir a la adopción de un Convenio de ámbito universal que codifique las normas sobre la materia. En ausencia de dicho Convenio es recomendable la celebración de Tratados, ya sean bilaterales o multilaterales, que tiendan a eliminar las controversias y, en su caso, regulen su solución en el plano internacional.

3°. Es recomendable igualmente el estudio del Derecho comparado, de la práctica diplomática internacional y de los acuerdos celebrados entre Estados o entre organismos estatales y particulares, como medio idóneo para precisar los supuestos en que la inmunidad de jurisdicción resulta esencial para el ejercicio de las funciones soberanas del Estado.

4°. Los Estados, al alegar su inmunidad de jurisdicción, deberán ajustarse a las normas procesales del foro. En especial habrán de conformarse a las reglas relativas a la capacidad, legitimación y representación procesales, y no podrán extender los efectos de la inmunidad a personas físicas o jurídicas no estatales mediante contratos u otros negocios jurídicos.

5°. Deberían establecerse, por convenio, procedimientos especiales para resarcir a los particulares por los daños resultantes de actividades cubiertas por la inmunidad jurisdiccional del Estado extranjero.

El Derecho de la Cooperación Económica Internacional

Ponente: Antonio LINARES FLEYTAS (Venezuela)

El IX Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional.

Teniendo presentes las resoluciones adoptadas por el VI Congreso (Caracas-Mérida, 1967) sobre «Régimen jurídico internacional de las inversiones de capitales extranjeros» y en el VIII Congreso (Lima, 1970), sobre «El derecho de desarrollo de los Estados».

Observando con satisfacción que muchos de los principios en ellas contenidos han sido recogidos en diversas Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en especial, en la Resolución 2.625 (XXV).

Consciente de que la solidaridad e interdependencia de los pueblos están exigiendo la formulación de principios y normas aplicables a la cooperación económica internacional con la finalidad esencial de promover el desarrollo integral de la persona humana.

Convencido de que un régimen jurídico apropiado para la cooperación económica internacional contribuye a la consolidación de la paz y seguridad internacionales.

DECLARA:

I.- Es deber de los Estados -del que ninguno puede eximirse, fuere cual fuere su grado de desenvolvimiento- cooperar al desarrollo económico de todos los miembros de la Comunidad internacional.

Los Estados tienen el derecho de participar en las Organizaciones y Tratados internacionales cuyo objeto sea el promover la cooperación económica y el desarrollo de los miembros de la Comunidad Internacional.

II.- La cooperación económica internacional deberá regirse por los siguientes principios fundamentales:

a) El respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la igualdad y soberanía de los Estados, incluida la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales.

b) La no intervención en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados y, en particular, la obligación de no condicionar la cooperación y la ayuda a otros motivos que los puramente económicos.

c) La no discriminación en razón de las diferencias entre los sistemas sociales, económicos o políticos de los Estados.

d) El arreglo por medios pacíficos de toda controversia que surja con motivo de la cooperación económica internacional.

III.- Los Estados deben cooperar a fin de que los países industrializados y en desarrollo puedan participar equitativamente en los conocimientos científicos y técnicos para permitir que estos últimos asuman progresivamente la responsabilidad primordial de su propio desarrollo.

IV.- Se reconocen como instrumentos aprobados para la cooperación económica internacional.

a) Las organizaciones intergubernamentales y, en particular, la Organización de las Naciones Unidas y el sistema de instituciones con ella relacionadas.

b) Las organizaciones internacionales regionales y subregionales.

c) Los tratados de integración económica.

d) Las asociaciones de Estados ligados por un interés común respecto a determinados productos o servicios, así como las asociaciones de Estados destinadas a regular el mercado internacional de productos básicos.

e) Los acuerdos económicos internacionales entre una organización internacional y un Estado o grupo de Estados, o entre organizaciones internacionales.

f) Los acuerdos económicos, bilaterales o multilaterales, entre Estados.

g) La creación, por acuerdos entre organismos públicos, de empresas o sociedades.

V.- La cooperación económica puede lograrse también:

a) Mediante la inversión privada extranjera que participe en empresas y sociedades nacionales de capital mixto y de carácter público.

b) Mediante la inversión privada extranjera complementaria de la inversión nacional y sujeta a las disposiciones del país receptor.

Características jurídicas de las organizaciones subregionales en el continente americano.

Ponentes: Alejandro MONTIEL ARGÜELLO y Juan MUNGUÍA NOVOA (Nicaragua).

El IX Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional.

Considerando que es característica de las organizaciones subregionales americanas tender esencialmente al desenvolvimiento de las naciones que las integran y que, en tal sentido, representan un proceso dinámico, mutable y en constante evolución;

Considerando que las organizaciones subregionales americanas, en su proceso de evolución, tienden a adaptarse a las circunstancias de cada momento, no siendo organismos estáticos cuya estructura haya llegado ya a plasmarse en instituciones sólidas, lo que no podrá alcanzarse mientras no se logren las condiciones mínimas de homogeneización en todos los aspectos;

Recordando la Resolución I aprobada en el V Congreso del Instituto (Santiago de Compostela, 1966) sobre «Los aspectos jurídicos de las integraciones económicas»;

DECLARA:

1. Las organizaciones subregionales desempeñan una importante función en el continente americano, estimándose conveniente que sus objetivos en el proceso de integración sean tan amplios como sea posible.

2. También sería deseable intensificar las relaciones de esas organizaciones, así como coordinar y armonizar sus esfuerzos con los de otras organizaciones internacionales.

3. El perfeccionamiento de las organizaciones subregionales de integración debería llevar a la creación de órganos competentes para dictar normas directamente obligatorias de Derecho Comunitario.

4. En cuanto forma parte del Derecho Internacional, este Derecho Comunitario prevalece sobre el Derecho interno, debiendo promoverse con tal fin las reformas constitucionales necesarias en aquellos Estados en que todavía no se hubieran realizado.

5. Toda organización subregional deberá tener un órgano independiente, con funciones ejecutivas y reglamentarias.

6. Igualmente debería preverse en los tratados subregionales de integración económica la institución de un órgano jurisdiccional, al cual pueden tener acceso tanto los Estados miembros como las personas físicas y jurídicas.

Los reflejos del movimiento de integración económica en el Derecho Privado y en el Derecho Internacional Privado

Ponente: Isabel de MAGALHÃES COLLAÇO (Portugal)

El IX Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional,

Reconociendo la importancia de los procesos de integración económica internacional actualmente en curso, en que participan muchos países hispano-luso-americanos;

Considerando que la realización de un proceso de integración económica exige una unificación progresiva de ciertos principios de Derecho privado y de Derecho internacional privado en los Estados participantes;

Dejando a salvo la existencia de aspectos de Derecho público que, por su incidencia en las relaciones privadas, es conveniente someter a una regulación uniforme, así como el hecho de que la integración económica tiene entre sus finalidades posibles la de preparar la integración política;

Manifestando su confianza en los resultados que, fuera del ámbito de la integración económica, puedan conseguirse en la unificación jurídica;

RECOMIENDA:

A los Estados que pretendan iniciar o continuar un proceso de integración económica:

1º. Que promuevan el estudio por los organismos apropiados de los principios y reglas a adoptar en el campo del Derecho privado y del Derecho internacional privado en orden a asegurar especialmente:

a) la no discriminación entre las personas físicas nacionales de los diversos Estados participantes, así como entre las Entidades a ellas equiparadas, en el acceso a las actividades económicas y a su ejercicio dentro del espacio integrado;

b) el establecimiento de un régimen que garantice que la importancia no sea falseada;

c) la uniformidad progresiva de ciertas partes del Derecho Mercantil, en especial sociedades, títulos-valores, contratos de transporte y de seguros, operaciones bancarias y propiedad industrial.

2°. Que determinen las disposiciones internas vigentes que hayan de ser aceptadas de conformidad con los principios y reglas antes referidos;

3°. Que promuevan también el estudio de las reglas que deben adoptarse con vistas a la armonización de las legislaciones internas en la medida exigida por la creación y el funcionamiento normal del mercado integrado;

4°. Que convengan los procedimientos para conseguir la formulación, a nivel internacional, de los principios y reglas comunes referidas en los números 1° y 3°.